

NUE 143-A-2017 (RC)

Barraza contra Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete.

1. Descripción del caso:

Jorge Daniel Barraza apeló en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, que denegó el acceso a la información relativa a: “**a)** las líneas jurisprudenciales del Juzgado Especializado en extinción de dominio; **b)** las líneas jurisprudenciales de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro en materia de extinción de Dominio; y, **c)** copias simples de los recursos presentados y fenecidos del Juzgado Especializado en Extinción de dominio”.

La negativa de la **UAIP** de la **CSJ** se basó en que la información solicitada en los literales **a)** y **b)** se trata de información inexistente, y en relación al literal **c)** es información jurisdiccional por lo que la Oficial de Información se declaró incompetente para entregarla.

El Instituto admitió la apelación y se designó al comisionado Mauricio Antonio Vásquez López, al finalizar su período de nombramiento el caso fue reasignado al comisionado René Eduardo Cárcamo para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

2. Análisis del caso:

Para resolver la controversia se hará una breve referencia al derecho de acceso a la información pública (DAIP) y a la información inexistente (**I**); se realizará una reseña de los argumentos alegados por las partes (**II**); para luego analizar la aplicación de las causales de la no entrega de información y sobre la inexistencia alegada en el caso concreto (**III**).

I. El acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a la información en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

El DAIP posee límites que deben estar previamente establecidos por el legislador, de esta manera se previene que la Administración Pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información que solicitan los ciudadanos. En ese contexto, una de las excepciones al principio de máxima publicidad es la información inexistente, entendiéndose así, cuando la información no ha sido producida aún o cuando no se encuentra en los archivos del ente obligado. Por tanto, la ley presupone que si una información no fue encontrada en los archivos institucionales no existe, sin embargo debe constar la declaratoria de inexistencia por parte del Oficial de Información para que esta causal sea debidamente acreditada.

II. A continuación se realizará una reseña de los argumentos vertidos por el demandante y por la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**:

1. En el caso bajo análisis, el apelante argumentó en su escrito de interposición del recurso, que en relación a los ítems a) y b) las resoluciones se encuentran basadas en los criterios y líneas jurisprudenciales por lo que dicha información no puede ser inexistente. En cuanto al ítem c) indicó que se trata de documentos que no pueden recurrirse y que no hay motivos para denegar la información. Posteriormente, manifestó que si bien no existe potestad reglada que obligue al Centro de Documentación Judicial (CDJ) a publicar líneas y criterios jurisprudenciales, el DAIP tiene potestad para ordenar la entrega de información administrativa al órgano judicial, lo cual configura el principio de legalidad consagrado en el art. 86 inciso tercero de la Constitución de la República.

2. El 1 de junio de este año, se realizó la audiencia de avenimiento en la que se le entregó al apelante, el oficio CDJ 161/2017, de fecha 30 de mayo de 2017, suscrito por la Jefa del Centro de Documentación Judicial (CDJ) en el que manifestó que no existe disposición legal que obligue al CDJ a publicar las líneas y criterios jurisprudenciales de todos los tribunales del país, y como una buena práctica del Órgano Judicial se publican en libros impresos, así como una versión digital únicamente de los máximos tribunales del país, basados en el nivel jerárquico y la relevancia jurídica que constituyen las sentencias emitidas en áreas respectivas, tales como la Sala de lo Penal, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de lo Civil, Sala de lo Constitucional y Cámaras de Segunda Instancia. Sin embargo, todas las sentencias definitivas son sistematizadas.

3. En el Informe Justificativo, la **CSJ** indicó que la información requerida no se ha generado, porque el Jefe del Departamento de Publicaciones de la CSJ informó que no ha publicado las líneas y criterios jurisprudenciales de los tribunales mencionados en materia de extinción de dominio, señalando que la oficial de información interina emitió la respectiva confirmación de inexistencia de la información aludida, luego de haberse llevado a cabo las gestiones pertinentes, de conformidad al art. 73 de la LAIP.

4. Durante la audiencia oral, la apoderada del ente obligado reiteró los argumentos descritos en los párrafos precedentes, y agregó en cuanto a la inexistencia de la información, que en atención al art. 2 de la LAIP las instituciones están obligadas a brindar información que se encuentre únicamente en su poder; siendo así que, de la interpretación integrada del art. 62 y 73 de la LAIP se debe establecer que si la información es inexistente se vuelve una causal para no entregar la información que ha sido requerida.

Además, señaló que no existe norma legal que obligue al Órgano Judicial a generar, como parte de información, los criterios jurisprudenciales y que ha sido una buena práctica de la **CSJ** publicar criterios y líneas jurisprudenciales.

III. Ahora que se han descrito los argumentos dados por el apelante y los alegatos dados por el ente obligado, es pertinente que este Instituto realice el análisis para el presente caso:

1. Respecto al requerimiento de *“copias simples de los recursos presentados y fenecidos del Juzgado Especializado en Extinción de dominio”*, este Instituto, mediante auto de admisión de las quince horas con tres minutos del 23 de mayo de 2017, estableció que no existe controversia y no sería del conocimiento de este Instituto porque tal como lo indicó la Oficial de Información de la CSJ esta es información jurisdiccional, en tal sentido no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CSJ el ente obligado de dar trámite a dicha solicitud, sino que la dependencia judicial de la que se requiere la información. Lo anterior en relación a la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional y también desarrollada y aplicada por el IAIP,

2. En relación a los requerimientos de *“las líneas jurisprudenciales del Juzgado Especializado en extinción de dominio”* y *“las líneas jurisprudenciales de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro en materia de extinción de Dominio”*, de los cuales el ente obligado estableció que es información inexistente. El IAIP ha sostenido con base en el art. 73 de la LAIP que, cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos de la Unidad administrativa correspondiente, el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia y en caso de no encontrarla expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

Además, este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: *a)* que nunca se haya generado el documento respectivo, *b)* que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; *c)* que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria¹.

Cabe aclarar que, la **información inexistente** concurre cuando no ha sido producida aun, o cuando no se encuentra en los archivos del ente obligado, sumado a ello la Ley presupone que si la información no fue encontrada en los archivos institucionales es porque

¹ Resolución Definitiva IAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

no existe. Al respecto, en la resolución emitida por la oficial de información, a las diez horas y treinta y tres minutos del 26 de abril de 2017, en el párrafo cuarto de la página cinco, establece que deberá confirmarse la inexistencia de la información al 27 de abril de 2017, de conformidad con el art. 73 de la LAIP y en virtud de las gestiones de búsqueda realizadas en las unidades correspondientes (diligencias verificadas por este Instituto mediante el expediente administrativo remitido por la **CSJ**). Sin embargo, no existe la declaratoria de inexistencia sobre los documentos requeridos por **Jorge Daniel Barraza**, ello de conformidad al art. 73 de la LAIP. En ese sentido, es necesario que la **CSJ** realice la declaratoria de inexistencia respectiva y que la misma sea publicada en el portal web de esa institución.

Por otra parte y para mayor sustento, es atinente hacer mención que el **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México**, en relación a la inexistencia de información, sostiene que: *“la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad -es decir, se trata de una cuestión de hecho-, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada”*; criterio que comparte este Instituto aplicado al presente caso.

Además, el **IAIP** tiene como base los criterios emitidos por la **Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**, y en relación a la inexistencia de información ha establecido que *“Se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ello, se deberá acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales, consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: 1. Que se turnó la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso, la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; 2. Que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que éstas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; 3. Que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo), y 4. Que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentales o información que den*

cuenta de lo solicitado; 5. La precisión, en su caso, de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil de la misma, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (sujeto obligado), ésta deberá generarse o reponerse en los casos que, sea posible”.

En virtud de los argumentos expuestos, el Instituto de Acceso a la Información Pública considera procedente confirmar la resolución impugnada, dado que se ha determinado que la información solicitada por **Jorge Daniel Barraza** no existe a la fecha. Sin embargo es pertinente que la **CSJ** emita la resolución en la que declare la inexistencia de la información en comento y que la misma sea publicada en el portal web de esa institución.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 6 y 18 de la Cn., 52 inciso 3º, 58 letras b., y d.; 94, 96 letra b., y 102 de la LAIP; y 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) Confirmar la resolución emitida por la Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)** de fecha 27 de abril de 2017, e impugnada por **Jorge Daniel Barraza**.

b) Ordenar a la Oficial de Información de la **CSJ** que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, emita la declaratoria de inexistencia de la información relacionada a “las líneas jurisprudenciales del Juzgado Especializado en extinción de dominio” y a “las líneas jurisprudenciales de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro en materia de extinción de Dominio” y que la misma sea publicada en el portal web de esa institución.

c) Ordenar a la **CSJ** que, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de las obligaciones contenidas en la letra b) de esta parte resolutive, bajo pena de iniciar el

procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: fiscalización@iaip.gob.sv.

d) Remitir el presente expediente a la Unidad de Fiscalización de este Instituto para que verifique el cumplimiento de esta resolución.

e) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-

-----ILEGIBLE-----CHSEGOVIA-----ILEGIBLE-----ILEGIBLE-
-----PRONUNCIADO POR LOS COMISIONADOS QUE LO
SUSCRIBEN"RUBRICADAS"